

Santiago, ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

A los escritos folios 110168 y 110802: téngase presente.

Visto y teniendo presente:

Primero: Que comparece el abogado don José Tomás Santander Zárate, en representación de don Jorge Zárate Perry, demandante en autos sobre tutela laboral por vulneración de derechos con ocasión del despido y, en subsidio, despido injustificado y cobro de prestaciones, Rit T-150-2024, seguidos ante el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, quien deduce recurso de queja en contra de los integrantes de una sala de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra señora María Carolina Catepillan Lobos, ministra suplente señora Alondra Castro Jiménez y abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz, por haber dictado con faltas o abusos graves la resolución de 27 de agosto de 2024, por la cual confirmaron la de primer grado que declaró la caducidad de la acción principal de tutela laboral y de la subsidiaria de despido injustificado.

Manifiesta que con fecha 17 de junio de 2024, interpuso demanda de vulneración de derechos fundamentales y cobro de indemnizaciones, y, en subsidio, de despido injustificado y cobro de prestaciones laborales, y que el Juzgado de Letras del Trabajo de San Miguel, mediante resolución de 26 de junio de 2024, declaró la caducidad de la acción principal y de la subsidiaria de despido injustificado, por estimar que de la fecha de presentación de la demanda, el 17 de junio de 2024, la época de conclusión de los servicios, el 5 de marzo de 2024, y la suspensión del plazo respectivo entre los días 1 y 15 de abril del 2024 por la presentación del reclamo ante la Inspección de Trabajo, se desprende que la parte recurrió al juzgado competente luego de vencido el término de 60 días hábiles previsto en la legislación; decisión que fue posteriormente confirmada por la sentencia impugnada.

Sostiene que se incurre en falta y abuso al declarar que la demanda debía ser deducida dentro de los 60 días hábiles siguientes al despido, sin considerar el término de 90 días hábiles que reconoce la legislación para el caso en que se interponga el reclamo administrativo previsto en el artículo 168 del Código del Trabajo, con lo que se conculcó tanto esa norma como la garantía consagrada en el artículo 19 N°3 de la Constitución Política de la República, pues la judicatura recurrida no sólo cometió un grave error de hecho y de derecho, sino que también incumplió su deber de fundamentar la decisión, vicios que afectan sus posibilidades de defensa y que lo privan de su potestad de sostener la acción ante la sede jurisdiccional competente a fin de obtener un pronunciamiento de fondo.



Solicita se acoja el recurso, y, por consiguiente, se deje sin efecto la resolución impugnada y se dicte en su reemplazo una que revoque la resolución apelada y que ordene seguir adelante con el procedimiento.

Segundo: Que, al evacuar el informe de rigor, los recurridos señalaron que efectivamente dictaron la resolución cuestionada, que confirmó aquella que declaró la caducidad de la acción de tutela laboral y de despido injustificado, por haber sido ejercidas una vez vencido el plazo de 60 días hábiles, pues de los antecedentes consta que la demanda afirma que la relación laboral concluyó el 5 de marzo de 2024, que la acción se dedujo el 17 de junio de 2024, y que el término para su interposición estuvo suspendido por el trámite administrativo ante la Inspección del Trabajo entre los días 1 y 15 de abril de 2024, de lo que necesariamente se colige que la acción fue deducida fuera del término legal previsto en el inciso final del artículo 168 del Código del Trabajo.

Tercero: Que el recurso de queja está regulado en el Título XVI del Código Orgánico de Tribunales, denominado “De la jurisdicción disciplinaria y de la inspección y vigilancia de los servicios judiciales”, y su párrafo primero, intitulado de “Las facultades disciplinarias”, contiene el artículo 545 que lo consagra como un medio de impugnación que tiene por exclusiva finalidad corregir las faltas o abusos graves cometidos en la dictación de sentencias definitivas e interlocutorias que pongan fin al juicio o hagan imposible su continuación, que no sean susceptibles de recurso alguno, ordinario o extraordinario.

Cuarto: Que, conforme al artículo 545 de ese cuerpo legal, el recurso de queja solamente procede cuando en la resolución que lo motiva se haya incurrido en falta o abuso constituidos por errores u omisiones, manifiestos y graves.

Quinto: Que, en el presente caso, el mérito de los antecedentes no permite concluir que los miembros de la judicatura recurridos -al decidir como lo hicieron- hayan incurrido en alguna de las conductas que la ley reprueba y que sea necesario reprimir y enmendar mediante el ejercicio de las atribuciones disciplinarias de esta Corte, por cuanto la decisión adoptada se ajusta plenamente a las normas que regulan la caducidad del tipo de acción deducida.

En efecto, consta de las alegaciones del recurrente, del informe de los recurridos y de los antecedentes de la causa, que la demanda se interpuso el día 17 de junio de 2024, en relación al despido de 5 de marzo de 2024, y que la parte dedujo un reclamo ante la Inspección del Trabajo el 1 de abril de 2024, gestión que concluyó el día 15 de ese mes.

Por otra parte, las acciones planteadas en autos son, en forma principal, la de tutela laboral por vulneración de derechos cometida con ocasión del despido y, en subsidio, la de despido injustificado, cuyos plazos de caducidad están



regulados en los artículos 489 y 168 del Código del Trabajo, respectivamente, correspondientes ambos a sesenta días hábiles contados desde la separación, término susceptible de ser suspendido en la forma que refiere el inciso final de la última norma mencionada, que, a su vez, dispone que el cómputo en cuestión se suspenderá cuando, dentro de ese lapso se interponga un reclamo por cualquiera de las causales indicadas, ante la Inspección del Trabajo respectiva, y agrega “Dicho plazo seguirá corriendo una vez concluido este trámite ante dicha Inspección. No obstante lo anterior, en ningún caso podrá recurrirse al tribunal transcurridos noventa días hábiles desde la separación del trabajador”.

De lo anterior, se deduce que el plazo debía computarse entre el día siguiente al despido y aquél en que se interpuso la demanda, considerando su suspensión entre los días 1 y 15 de abril de 2024, esto es, deben considerarse los días transcurridos entre el 6 y el 31 de marzo de 2024 y entre el 16 de abril y el 17 de junio de 2024, sin que en el caso aplique el límite máximo de noventa días hábiles dada la breve conclusión de la gestión administrativa, lo efectivamente arroja que la parte accionó fuera del plazo establecido en la legislación, como se decidió en el caso.

Sexto: Que lo precedentemente razonado resulta suficiente para concluir que el presente arbitrio disciplinario debe ser desestimado.

Y de conformidad, además, con lo dispuesto en los artículos 548 y 549 del Código Orgánico de Tribunales, se declara que **se rechaza** el recurso de queja interpuesto en contra de los miembros de la Corte de Apelaciones de San Miguel, ministra señora María Carolina Catepillan Lobos, ministra suplente señora Alondra Castro Jiménez y abogado integrante señor Adelio Misseroni Raddatz.

Regístrese, comuníquese y archívense.

Rol N° 43.438-24.-





Pronunciado por la Cuarta Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Andrea Maria Muñoz S., Jessica De Lourdes González T., Ministro Suplente Juan Manuel Muñoz P. y los Abogados (as) Integrantes Leonor Etcheberry C., Fabiola Esther Lathrop G. Santiago, ocho de noviembre de dos mil veinticuatro.

En Santiago, a ocho de noviembre de dos mil veinticuatro, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

